

A stack of three books with red, blue, and white covers is positioned diagonally. A wooden gavel with a fluted head and a smooth handle lies in the foreground, partially overlapping the books. The background is a dark, textured surface.

Doc
tri
na

Ci
en

tí

fi

ca

Tributos

Tasas

LA TARIFA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA A LA LUZ DE LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Íñigo Barberena Belzunce

Profesor de Derecho Financiero y Tributario. UNED

Pedro Manuel Herrera Molina

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UNED¹

I. INTRODUCCIÓN. II. LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP). III. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA TARIFA. III.1. OBLIGADOS AL PAGO. III.2. CUOTA DE LA TARIFA. III.3. DEVENGO, EXACCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TARIFA. IV. LA TARIFA DE LA MCP A LA LUZ DE LA NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA EN MATERIA DE RESIDUOS. V. CONCLUSIÓN.

RESUMEN: La mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha establecido una tarifa por la prestación del servicio de gestión de residuos. En este trabajo estudiamos las características de la mancomunidad, los elementos configuradores de esta prestación patrimonial de carácter público no tributaria y las adaptaciones que convendría realizar atendiendo a la normativa estatal y europea.

PALABRAS CLAVE: Pamplona, pago por generación, residuos, tarifas.

ABSTRACT: The Municipal Area of the District of Pamplona has established a fee for the provision of the waste management service. In this paper, we study the Municipal Area's characteristics, the payment elements and the possible reforms attending to state and European regulations.

KEYWORDS: Pamplona, pay as you throw, waste, fees.

1 Este trabajo se ha desarrollado en el seno del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación La reforma ambiental de las Haciendas Locales (PID2019-109631GB-I00), Locales con la financiación de la Agencia Estatal de Investigación (PID2019109631GB-I00/AEI/10.13039/501100011033).

Fecha recepción: 20 de abril de 2023 - Fecha aceptación: 3 de mayo de 2023.

I. INTRODUCCIÓN

Como es conocido, una de las reformas legislativas de los últimos años que más interés ha suscitado, sin duda por la enorme confusión que ha originado, ha sido la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario².

Alguien debió considerar que con la mera supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) de la LGT³, a través de la disposición final quincuagésima octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, era suficiente para llevar a cabo una reforma clara y nítida del concepto de tasa, evitando así que en lo sucesivo se pudieran calificar como tales las tarifas del agua cobradas por empresas concesionarias de ese servicio, como había hecho alguna sentencia.

Sin embargo, esta reforma, claramente insuficiente por no ir acompañada de la modificación de los correspondientes pre-

ceptos del TRLRHL y de la LTPP, se quedó muy lejos de alcanzar el éxito que seguramente sus ideólogos habían imaginado, ya que, a pesar de la supresión del mencionado párrafo del art. 2.2.a) de la LGT, el Tribunal Supremo siguió manteniendo en Sentencias de 23 y 24 de noviembre de 2015⁽⁴⁾ su doctrina —amparada en las SSTC 185/1995 y 102/2005— de la irrelevancia de la forma de gestión del servicio para calificar como tasas las prestaciones patrimoniales coactivas derivadas de la prestación de servicios públicos de titularidad local. Lo que lisa y llanamente suponía negar efecto jurídico alguno a la reforma realizada por la Ley de economía sostenible.

Si para algo sirvió la modificación realizada por esa ley fue para sembrar el caos. Muestra de ello es, por ejemplo, la Ordenanza aprobada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el servicio de gestión de los residuos de 2017⁽⁵⁾. En ella la entidad supramunicipal, ante la incertidumbre y confusión generadas, prescinde de calificativo o *nomen iuris* alguno y la aprueba como “ordenanza reguladora de la

2 Por todos, Sanz Gómez, R. (2021), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias a la luz de las transformaciones del modelo de Estado: una propuesta de clarificación”, en *Civitas Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 191, págs. 183-23; Martínez Sánchez, C. (2019), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el ámbito local: origen y regulación actual”, *Anuario de Derecho Municipal* 13, págs. 57-83; Fluixá Martínez, A. (2021), “El gran debate de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”, en <https://derecholocal.es/opinion/el-gran-debate-de-las-prestaciones-patrimoniales-de-caracter-publico-no-tributario> (consultado el 27-5-2022); Palao Taboada, C. (2023), “Prestaciones patrimoniales de carácter público”, en *Revista de Contabilidad y Tributación*, CEF, 481 (abril 2023), pp. 5-58.

3 En el que se disponía que: “Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público”, por lo que la forma de gestión de los servicios resultaba completamente indiferente a la hora de calificar como tasa la contraprestación económica exigida por ellos, bastando con que la competencia en la que se encuadrara el servicio fuera de la titularidad del ente público.

4 Dictadas en Recursos núms. 4091/2013 y 232/2014, respectivamente.

5 Publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 30 de diciembre de 2016.

financiación de los servicios de gestión de los residuos 2017”. Evidenciando de este modo que la entidad no tiene una idea clara y precisa de qué es lo que está regulando en la ordenanza, si una tasa, una tarifa, o como quiera que se llame y sea su régimen jurídico. Lo único que está claro en todo este devenir es que hay que cobrar por recoger la basura, que del nombre y la naturaleza jurídica de la contraprestación a pagar por el servicio ya se encargaran otros.

De este modo, y como a veces suele ocurrir en la vida, en la que no siempre las cosas se hacen bien a la primera, la fallida reforma de la Ley de economía sostenible tuvo que ser posteriormente confirmada, esta vez de forma mucho más clara y rotunda, aunque no por ello exenta de polémica⁶, a través de las disposiciones finales novena, undécima y duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que modificaron, respectivamente, la Ley de Tasas y Precios Públicos (art. 2.c, aunque en realidad se trata de la adición de una nueva letra “d” puesto que el art. 2 ya tenía letra “c”); el TRLRHL (art. 20.6) y la disposición adicional primera de la LGT, regulando esta última por primera vez las prestaciones patrimoniales de carácter público y estableciendo la distinción entre

las tributarias y las no tributarias.

Esta reforma legislativa no se llevó a cabo en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Foral de Navarra hasta casi un año después de la entrada en vigor de la LCSP, ya que fue el art. 6.9 de la Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, el que —con efectos a partir del 1 de enero de 2019— añadió una nueva disposición adicional trigésima a la Ley Foral General Tributaria⁷ de contenido idéntico al de la disposición adicional primera de la LGT del Estado una vez modificada por la LCSP.

Posteriormente, y en lo que se refiere a las tasas de las Entidades Locales de Navarra, el artículo único, apartado 2, de la Ley Foral 3/2019, de 24 de enero, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra⁸, añadió un nuevo apartado 7 a su art. 100 de contenido análogo al del apartado 6 del art. 20 del TRLRHL introducido por la disposición final duodécima de la LCSP.

No obstante, entre ambos preceptos existe una importante diferencia, consistente en que la norma navarra añade un párrafo final en el que se establece que: “*Las deudas deri-*

6 Como lo atestigua el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra el art. 289.2, la DA 43ª y las DF 9ª, 11ª y 12ª de la LCSP, y que finalmente fue desestimado por la STC 63/2019, de 9 de mayo. Un interesante análisis de esta sentencia, así como de otras cuestiones no planteadas en la demanda de inconstitucionalidad —y, por consiguiente, no abordadas en la STC— que suscitan las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias puede verse en Tandazo Rodríguez, A. y Herrera Molina, P.M. (2019), “Una nueva parafiscalidad: Constitucionalidad de las “tarifas” como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias”, *Tributos Locales* 142, págs. 29-43.

7 LF 13/2000, de 14 de diciembre.

8 LF 2/1995, de 10 de marzo.

vadas de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán exigirse por el procedimiento de apremio por los órganos de recaudación de la entidad local”.

En nuestra opinión, este precepto constituye un despropósito⁹. Las deudas derivadas de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario no deberían poder exigirse por el procedimiento administrativo de apremio por la sencilla razón de que ni son ingresos de derecho público (aunque se consideren “prestaciones patrimoniales públicas”)¹⁰, ni el titular del derecho de crédito (Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.) dispone del privilegio de la ejecutoriedad de sus actos puesto que no es Administración Pública¹¹.

En términos jurídicos no es aceptable que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (entidad local de carácter supramunicipal) huya del derecho administrativo, interponiendo una entidad mercantil de derecho privado entre el servicio público de que es titular y los usuarios de ese servicio, pero que solo lo haga para lo que le interesa o conviene, no para lo que no le conviene o

le resulta desfavorable. Por mucho que lo diga una ley, contradiciendo lo dispuesto en el art. 5.2 de la misma ley en la que el nuevo precepto se inserta, pretender lo mejor de los dos mundos constituye un fraude muy poco estético.

Por último, el art. 1.4.c) de la Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, excluye de su ámbito de aplicación *“Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos públicos, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias”.*

Llegados a este punto, y puesto que en la actualidad el régimen bajo el que se gestione el servicio de recogida de residuos urbanos determina la naturaleza jurídica de la contraprestación económica a satisfacer por los usuarios de dicho servicio, necesariamente debemos referirnos a continuación, siquiera sea brevemente, a cómo se gestiona dicho servicio en los municipios que integran la

9 Aunque en territorio común diversos autores han sostenido la posibilidad de recaudar las «tarifas» en vía de apremio a partir del art. 2.2 LHL [Aneiros Pereira, J., 2018, “La incorporación al Derecho positivo tributario del concepto de prestación patrimonial de carácter público por, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y sus pretendidas consecuencias”, en Quincena Fiscal, núm. 7, ap. VI.3. Del Amo Galán, O. (2018), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público. Aspectos prácticos”, en La Ley, núm. 15611, ap. V].

10 El art. 5.2 de la LF de Haciendas Locales de Navarra dispone que: “Para la cobranza de los tributos y demás cantidades que como ingresos de Derecho público deban percibir las entidades locales de Navarra, éstas ostentarán las mismas prerrogativas que la Hacienda Pública de Navarra”. Como se puede apreciar, este precepto se refiere solo a los tributos y demás ingresos de derecho público, no a los de derecho privado, como son las tarifas. Pero es que, además, limita la extensión de las prerrogativas (entre ellas la ejecución mediante el procedimiento de apremio) a las cantidades que deban percibir las entidades locales, y las tarifas por servicios no son cantidades ni que perciban ni que deban percibir las entidades locales de Navarra (entre ellas la MCP) puesto que no figuran en sus presupuestos.

11 Sobre esta cuestión véase más ampliamente Tandazo Rodríguez, A. y Herrera Molina, P.M. (2019), “Una nueva para-fiscalidad: Constitucionalidad de las “tarifas” como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias”, op. cit., págs. 38-39, así como la bibliografía que ahí se cita.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

II. LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP)

Esta Entidad Local¹² se creó en el año 1982 como resultado de una decisión política adoptada en el seno de una comisión mixta, integrada por la Diputación Foral de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y las Entidades Locales de la comarca de Pamplona, con el fin de afrontar de forma conjunta el problema del abastecimiento del agua y, especialmente, el de la depuración de las aguas residuales, cuyo destino en todo el ámbito geográfico comarcal era el río Arga y sus afluentes. Asuntos que, ni administrativa ni económicamente, era posible abordar desde la acción individual de cada uno de los pequeños ayuntamientos implicados¹³.

La MCP nació de esta forma como “Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona” con la finalidad de gestionar el ciclo integral del agua. Sin embargo,

cinco años más tarde, en 1987, modificó sus Estatutos y denominación para pasar a gestionar otro de los problemas medioambientales que soportaba la comarca de Pamplona: la recogida y tratamiento de los residuos urbanos. Y lo hizo con el mismo principio básico de resolver en común, de forma eficiente y sostenible, lo que no se podía acometer individualmente por los ayuntamientos, siguiendo así la tendencia favorable a la gestión supramunicipal de los servicios esenciales mediante la agrupación de las entidades locales en mancomunidades, consorcios u otras entidades semejantes¹⁴.

Posteriormente, a finales de la década de los 90 y principios de la del 2000, la MCP asumió la gestión de nuevos servicios, como el de transporte colectivo urbano, el de taxi, y la gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

En la actualidad, la MCP integra 50 municipios que suman una población de más de 379.000 habitantes, titular de los cinco servicios que acabamos de mencionar que, en lo que al ciclo integral del agua y residuos se refiere¹⁵, gestiona de forma

12 El art. 3.1.d) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de régimen de la Administración Local de Navarra, establece que: “Además de los municipios, tienen también la condición de Entes Locales de Navarra: (...) e) Las Mancomunidades de ayuntamientos”. En idéntico sentido art. 3.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

13 El art. 47.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de régimen de la Administración Local de Navarra, establece que: “Los Municipios de Navarra pueden asociarse entre sí o con Municipios pertenecientes a otras Comunidades Autónomas para la ejecución en común de obras y para la prestación de servicios determinados de su competencia”. En idéntico sentido art. 44 de la LRBRL.

14 En este sentido, el art. 53 de la citada LF 6/1990 dispone que: “El Gobierno de Navarra fomentará la creación de Mancomunidades para una más racional y económica prestación de los servicios (...)”.

15 Por el contrario, la gestión del servicio de transporte urbano comarcal se lleva a cabo indirectamente mediante concesión.

directa a través de la sociedad mercantil “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, cuyo capital social, a fecha de hoy, pertenece íntegramente a la Mancomunidad.

En consecuencia, puesto que el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos se gestiona por la MCP de forma directa mediante personificación privada (sociedad de capital íntegramente público), la contraprestación económica que satisfacen los ciudadanos residentes en los municipios que forman la Mancomunidad por ese servicio público obligatorio tiene en la actualidad la naturaleza jurídica de prestación patrimonial pública de carácter no tributario, conforme a lo que establece la disposición adicional trigésima de la Ley Foral General Tributaria de Navarra, con lo que dicha contraprestación ha quedado desposeída de su anterior naturaleza jurídico tributaria de tasa, con las consecuencias que este hecho comporta por el diferente régimen aplicable a una y otra figura.

III. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA TARIFA

Aunque la gestión de los residuos urbanos comprende una multiplicidad de servicios, nosotros nos vamos a referir aquí exclusiva-

mente a los residuos domiciliarios o domésticos, excluidos los que se refieren a la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos.

III.1. OBLIGADOS AL PAGO

Los obligados al pago de la tarifa son las personas físicas o jurídicas, así como cualquiera de las entidades sometidas a imposición según lo dispuesto en el art. 25 de la LF General Tributaria, que por cualquier título habiten, ocupen o disfruten las viviendas, locales, establecimientos o centros en cuyo beneficio se preste o disponga el servicio.

En el caso de que no sean conocidos, estarán obligados al pago los propietarios de los inmuebles, los cuales podrán repercutir las cuotas de la tarifa sobre los respectivos beneficiarios. Obviamente, no se trata de un supuesto de sustitución tributaria puesto que no estamos ante un tributo.

Entendemos que este precepto debería corregirse para incluir entre los obligados al pago a los poseedores sin título, ya sean precaristas u okupas. Es decir, que debería considerarse obligados al pago a los que por cualquier título o sin él (de hecho) ocupan las viviendas, por ser ellos los generadores de los residuos¹⁶.

16 Así, por ejemplo, el art. 5 de la Ordenanza de San Sebastián-Donostia, al regular los sujetos pasivos de la tasa, no hace referencia ninguna al título jurídico por el que se ocupe o disfrute de las viviendas, locales o establecimientos, por lo que incluye tanto a los poseedores con título jurídico como a los poseedores de hecho que carecen de él (<https://www.donostia.eus/ordenanzas.nsf/vListadoId/1EF4A90A5D0B58CDC1257C1D002EBAA0?OpenDocument&csf=0&id=C671670&idioma=ca>). Por el contrario, el art. 4 de la Ordenanza de Vitoria solo considera sujetos pasivos de la tasa al titular del bien en los términos establecidos en la Ordenanza fiscal reguladora del IBI (BOTH A nº 146, de 29 de diciembre de 2021).

III.2. CUOTA DE LA TARIFA

La cuota total anual de la tarifa es la suma de la cuota fija más la cuota variable. Esta cuota total anual no puede exceder de la cuota máxima anual establecida por la ordenanza para cada uso al que esté destinado el inmueble. A su vez, la cuota total anual se divide por el número de periodos de facturación establecidos, que son dos: mensual o cuatrimestral, por lo que se dividirá, según los casos, por 12 (si es mensual) o por 3 (si es cuatrimestral).

La cuota fija por el servicio obligatorio de recogida, transporte y posterior valorización o eliminación de residuos domésticos viene directamente establecida en el anexo I de la Ordenanza y varía según los usos a los que se destinen los inmuebles.

Por el contrario, la cuota variable es el resultado de aplicar el tipo porcentual establecido en la ordenanza para cada tipo de inmueble según su uso a la magnitud resultante de multiplicar el valor catastral de la

vivienda¹⁷ por el coeficiente corrector establecido en el anexo II de la ordenanza para el municipio en el que radique dicha vivienda¹⁸. Solo se tiene en cuenta el valor catastral de la vivienda, no el de la plaza de garaje ni el del trastero, en el caso de que la vivienda cuente con estos anexos.

Respecto de la cuota variable hay que tener en cuenta tres aspectos:

En primer lugar, que no se aplica a los usuarios del servicio que tengan la consideración de “grandes productores de residuos”, que son todos aquellos que producen una cantidad de residuos de 12 m³ o más a la semana. Para estos grandes productores se establecen unas cuotas anuales específicas en función de los m³ semanales de residuos generados, con total independencia de los valores catastrales de los inmuebles.

Aunque el art. 6.1 de la Ordenanza establece que la cuota variable no se aplicará a los grandes productores de residuos, lo que podría inducir a pensar que sí se les aplica la cuota fija en función del uso al que se destine el inmueble, lo cierto es que ésta última

17 Por el contrario, en el Municipio de San Sebastián-Donostia se utiliza como parámetro de cuantificación los metros cúbicos de agua consumida, y en el de Vitoria los metros cuadrados de superficie construida que tenga la vivienda.

18 a) Como explica Serrano Antón, estos coeficientes correctores por municipio, cuando el titular del servicio es una entidad supramunicipal, se establecen para diferenciar el uso que hace cada municipio del total de los servicios prestados por la Mancomunidad (véase Serrano Antón, F.: “El pago por generación en la Tasa municipal de gestión de residuos como incentivo de reducción y reciclaje de residuos” en II Jornadas sobre la Reforma Ambiental de las Haciendas Locales, <https://canal.uned.es/video/62610e9fb6092314a63b3d49>, consultado el 3-6-2022). No creemos, sin embargo, que esa sea la finalidad de los coeficientes reductores establecidos en la Ordenanza de la MCP, puesto que en la misma se establece que el coeficiente corrector superior a 1 no se aplicará cuando el valor catastral del inmueble, durante el ejercicio de 2022, fuese superior a 49.044,64 euros, así como que si durante 2022 entrase en vigor una nueva ponencia de valoración, el coeficiente corrector de ese municipio deberá adaptarse en la proporción en la que los valores catastrales hayan sido modificados. De hecho, en las Resoluciones del Presidente de la MCP por las que se aprueban nuevos índices correctores aplicables al código de uso 4 (vivienda) de varios municipios, se afirma que se hace con el objetivo de igualar las bases imponibles de estos bienes dada la disparidad existente en el ámbito de la Mancomunidad (vid. BON nº 33, de 18-2-2020, en relación con el municipio de Echauri; BON nº 277, de 26-11-2020, en relación con Villava; BON nº 285, de 10-12-2020, en relación con Galar).

tampoco se les aplica, ya que como aclara el art. 7.1.a) de la propia Ordenanza los grandes productores abonan una única cuota total en función de los residuos que generen semanalmente, medidos en m³.

En segundo lugar, que en el supuesto de que el inmueble no tenga asignado valor catastral, la cuota variable aplicable será la establecida en el apartado I.G del anexo I de la Ordenanza para cada uno de los grupos de usos establecidos.

Y, en tercer y último lugar, que no se aplica —previo informe de los servicios de inspección— cuando entre el inmueble y el punto de recogida (ubicación de los contenedores) haya una distancia superior a 300 metros, o bien exista dificultad de acceso o maniobrabilidad para llegar a los contenedores de depósito de los residuos¹⁹. En estos casos, muy poco frecuentes en la práctica, especialmente el que se refiere a la dificultad de acceso o maniobrabilidad, puesto que si el usuario no puede acceder a los contenedores mucho menos podrá hacerlo el camión de recogida, la tarifa a aplicar será únicamente la cuota fija según el uso del inmueble.

Finalmente, el apartado B del anexo I de

la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial no tributaria establece una cuota especial para los usuarios del servicio en situación de vulnerabilidad económica, consistente en que la cuota total anual correspondiente al uso de vivienda será el 10 por 100 de la cuota que con carácter general les resulte de aplicación.

La propia Ordenanza especifica qué situaciones se consideran de vulnerabilidad económica:

Cuando el titular del contrato sea beneficiario de la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital.

Cuando el titular del contrato sea beneficiario del anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación.

Cuando el titular del contrato sea solicitante o beneficiario de los programas de acogida de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En relación con este último supuesto, de acuerdo con el criterio interpretativo²⁰ aprobado por Resolución del Presidente de la MCP de 22 de abril de 2022²¹, la refe-

19 El art. 7 de la Ordenanza de San Sebastián establece una exención en la modalidad de recogida de residuos tanto para los obligados cuyos inmuebles están situados a más de 200 metros del punto de recogida, como para aquellos cuyos inmuebles estén situados a más de 100 metros y el desnivel acumulado en los diversos tramos del recorrido entre el edificio y el punto de recogida sea igual o mayor al 6%. Esta exención pasa a ser una bonificación del 50% de la cuota cuando la distancia es superior a 100 metros, pero el desnivel acumulado es al menos un 3%. Estos beneficios parecen lógicos si se tiene en cuenta la orografía de la ciudad, totalmente enclavada entre montañas cuyas laderas acaban en el mar.

20 El art. 5 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión de Residuos, publicada en el BON nº 146, de 3 de julio de 2020, dispone en su último párrafo que: “La Mancomunidad establecerá la interpretación que estime conveniente en las dudas que pudieran presentarse en la aplicación de la presente Ordenanza”. Con posterioridad, esta Ordenanza fue parcialmente modificada por acuerdo de la Asamblea General de la MCP de 21 de octubre de 2021 (BON nº 259, de 12 de noviembre de 2021).

rencia a los Programas de acogida de protección internacional y atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe hacerse extensiva a las personas solicitantes de protección temporal prevista en las Órdenes PCM 169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto de Ucrania y la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

La aplicación de la cuota especial para estos usuarios tiene carácter rogado y su solicitud debe ir acompañada de la documentación que acredite su condición de beneficiario de Renta Garantizada, Ingreso Mínimo Vital, anticipo del importe de la deducción por pensiones no contributivas de jubilación, o de solicitante o beneficiario de los programas de acogida de protección internacional y atención humanitaria.

La concesión de esta cuota especial se realiza por un período de doce meses, salvo que la ayuda o prestación se haya establecido por un período superior, en cuyo caso el plazo de concesión de la cuota especial se adecuará al de la concesión de la prestación.

Esta reducción del 90 por 100 de la cuota total anual que con carácter general hubiera correspondido se aplica también, respecto de cualquiera de las tarifas reguladas en la Ordenanza, cuando la persona obligada al pago sea una organización no gubernamental y el servicio se preste para un acto público, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la recaudación para ayudas propias de sus fines.

III.3. DEVENGO, EXACCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TARIFA

Las prestaciones o tarifas establecidas por el servicio obligatorio de recogida, transporte y posterior valorización o eliminación de residuos domésticos se devengan el primer día de cada periodo de facturación mensual o cuatrimestral.

En el caso de incorporación al servicio, el devengo se produce el día de la incorporación, debiendo satisfacer el obligado al pago la parte proporcional a los días restantes hasta la finalización del primer periodo facturable.

La extinción del derecho a la utilización del inmueble conlleva la anulación de los efectos del devengo, de tal forma que la parte del importe de la tarifa devengada y pagada correspondiente a los días posteriores a la fecha de extinción deberá devolverse al obligado al pago.

21 Publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 10 de mayo de 2022.

A nuestro juicio, esta norma podría aplicarse también a los poseedores en precario con el consentimiento del propietario, no así a los okupas, a los que no habría que devolverles nada, al no poder acreditar la extinción de un derecho que nunca poseyeron.

Las deudas derivadas de las tarifas no requieren notificación alguna por derivar directamente de un censo de contribuyentes, dice el art. 11.1 de la Ordenanza.

El término contribuyente posee una honda raigambre en el Derecho tributario, ámbito al que no pertenecen las tarifas o prestaciones públicas no tributarias como la regulada por la Ordenanza a la que nos estamos refiriendo. Por este motivo, consideramos conveniente, de cara a futuras ordenanzas, sustituir la expresión “censo de contribuyentes” por “censo de usuarios”. Y, en cualquier caso, si se opta por mantener el término contribuyentes, habría que añadirle la expresión “a la financiación del servicio”.

Como decíamos, las deudas no se notifican, pero se entienden tácitamente notificadas, debiendo abonarse en el periodo de un mes desde su exacción. El incumplimiento del plazo de pago determinará la aplicación del interés legal vigente en cada periodo anual.

El pago se podrá hacer bien mediante domiciliación bancaria, bien por los medios

habilitados al efecto si no se ha domiciliado. La Ordenanza no especifica, sin embargo, cuáles son esos medios habilitados al efecto.

Por último, y como ocurre en todas las ordenanzas desde que se declaró el covid-19, la Ordenanza de la MCP prevé la interrupción del devengo de la tarifa por el servicio de recogida de residuos domésticos para los inmuebles en los que se ejerzan actividades económicas, en el caso de que se impongan restricciones motivadas por la pandemia que determinen el cierre de la actividad y la imposibilidad de su ejercicio.

IV. LA TARIFA DE LA MCP A LA LUZ DE LA NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA EN MATERIA DE RESIDUOS

En materia de medioambiente y ecología, la Comunidad Foral de Navarra ostenta la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación básica del Estado²².

De esta forma, la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que deroga la anterior de 28 de julio de 2011, obligará a introducir modificaciones en la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad²³, al haberse dictado en desarrollo de una ley estatal que ya no

22 Art. 57.c) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LO 13/1982, de 10 de agosto).

23 Vid. Ruiz de Apodaca Espinosa, A. (2019), “Hacia la economía circular. Aspectos destacados de la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 87. https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_18_Ruiz_Apodaca_Economia_circular_residuos-fiscalidad.pdf.

está en vigor.

En este sentido, la Ley 7/2022 contiene prescripciones que ineludiblemente obligarán a introducir cambios sustanciales en la actual configuración de la tarifa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos de la MCP.

Sin duda, el primer cambio que notarán los usuarios del servicio será un considerable incremento de las tarifas, ya que mientras que el art. 37 de la Ley Foral de residuos y su fiscalidad establece un tipo de gravamen en el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos de 20 euros por tonelada de residuos domésticos y comerciales entregados en vertederos por las entidades locales²⁴ para su eliminación, el art. 93.1.a) de la Ley 7/2022 establece en cambio para el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos 40 euros por tonelada (es decir, el doble) para los residuos municipales no peligrosos depositados en vertederos, y 20 euros por tonelada en el caso de incineración de residuos municipales que realicen operaciones de eliminación codificadas como operaciones D10 (art. 93.1.d), aunque los importes por tonelada varían mucho en función del tipo de residuo de que se trate y de determinadas circunstancias de carácter técnico.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art. 11 de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, “*las entidades*

locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.

Esta norma tiene un fundamento indirecto en el Derecho de la Unión Europea: La Ley de Residuos y Suelos Contaminados tiene, entre sus objetivos, incorporar la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE (DF 12ª).

Pues bien, aunque dichas normas no armonizan las tasas de residuos, los servicios de la Comisión recomendaron a las autoridades españolas “introducir un impuesto nacional sobre el depósito en vertederos o armonizar los impuestos de las comunidades autónomas para eliminar gradualmente [el depósito o incineración de] residuos reciclables o valorizables”. La recaudación debería canalizarse “hacia medidas que mejoren la gestión de residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos”. Además, se recomendaba “introducir tasas sobre los residuos

24 Bien directamente por ellas o bien a través de sus sociedades públicas o del Ente Público de Residuos de Navarra.

municipales obligatorias para los habitantes a un nivel adecuado con objeto de cubrir los costes de la recogida y el tratamiento, por ejemplo, a través del sistema de pago por generación de residuos”²⁵.

¿Qué cambios deberán introducirse en la regulación de la vigente «prestación» para adaptarse al mandato de la ley en el plazo señalado?

Una primera cuestión -a la que ya hemos aludido- es de orden competencial. Aunque la norma estatal no se haya introducido (por el momento) en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, parece claro que forma parte del régimen jurídico financiero local y, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la competencia para regular las haciendas de sus corporaciones locales corresponde al Parlamento foral.

La Disposición Final 10ª de la Ley de Residuos prevé que «En el primer semestre desde su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* se reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País Vasco y la Comisión del Convenio Económico con Navarra para acordar la correspondiente adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, a los impuestos creados por esta ley». Ahora bien, esta norma no se refiere a las tasas y tarifas reguladas en el art. 11.3, sino a los impuestos sobre plásticos (arts. 67 a 83) y sobre depó-

sito, incineración y co-incineración de residuos (arts. 84 a 97). La reforma del Convenio relativa (entre otras muchas cuestiones) al impuesto sobre residuos se llevó a cabo por la Ley 22/2022, de 19 de octubre. El impuesto especial sobre envases de plástico se ha introducido por la Ley 8/2023, de 3 de abril.

El título competencial que se invoca en la ley del Estado para regular las tasas y tarifas de residuos es el de «legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección» (DF 11ª). Por su parte, el art. 57 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra atribuye a Navarra «el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: (...) c) Medio ambiente y ecología».

A nuestro juicio, dado que se trata de una materia sobre la que existe un reparto de competencias -medio ambiente y haciendas locales- aunque Navarra se encuentre vinculada por el art. 11.3 de la Ley de Residuos como ley marco ambiental, sería necesario un desarrollo por el parlamento foral para su aplicación por los entes locales de Navarra. Dicho desarrollo podría introducirse en la citada Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, aunque sería preferible introducir una regulación más precisa en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de

25 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019 Informe de España [Bruselas, 4.4.2019 SWD(2019) 132 final], págs. 9 y 12.

Navarra.

En todo caso, los mandatos del art. 11.3 son lo suficientemente flexibles como para permitir un amplio margen de desarrollo por la normativa foral.

Los únicos puntos que no parecen admitir modulación es que las futuras tasas o tarifas han de ser «específicas» (no integradas en otras más generales), y «no deficitarias» (lo que se traduce en la necesidad de que reflejen «el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía»).

Los demás aspectos de la regulación estatal, aunque relevantes, resultan ambiguos. Así, se exige que la futura tasa o tarifa «permita (*sic*) implantar sistemas de pago por generación». Dichos sistemas, conocidos en la terminología anglosajona como *pay-as-you-throw*, se definen en el Anexo V de la Ley como aquellos que «impongan tasas a

los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados».

Por tanto, el pago por generación exige una cuota variable en función de los residuos generados y una diferenciación de gravamen en función del tipo de residuos²⁶. Esto no impide la exigencia de una cuota «general o básica» (fija o basada en criterios no ambientales) junto a la cuota variable por generación²⁷.

Como hemos visto, en el caso de los *grandes productores de residuos* la tarifa actual aplicable en la MCP ya varía en función del volumen de residuos generados, por lo que ya estamos ante un sistema de pago por generación, aunque sería conveniente introducir una diferenciación atendiendo a la fracción de residuos generados²⁸.

En el caso de los residuos domésticos, nos encontramos ante una situación paradójica, pues ya se exige el depósito selectivo de ciertos residuos en contenedores a los que se accede mediante una tarjeta magnética (fracción *orgánica* y fracción *resto*)²⁹, de modo que resultaría relativamente sencillo

26 En palabras de Pagès i Galtés, J. «el legislador [en la nueva Ley 7/2022] pretende que la tasa o tarifa coactiva de residuos sea netamente ambiental [subrayado nuestro], de tal manera que la recaudación derivada de la prestación económica satisfecha por el servicio de recogida de residuos no será el fin esencial perseguido, sino el instrumento del que se sirve la Administración para proteger el medio ambiente guiando la conducta de los ciudadanos, minusgravando a los que menos contaminan y sobregavando a los más contaminantes» [Pagès i Galtés, J. (2022), «La prestación económica por la gestión local de residuos (Segunda parte): extrafiscalidad y paraofiscalidad», en *Tributos Locales*, núm. 157, pág. 57].

27 Cfr. el excelente estudio de Terrén Pastor, A. et al. (2021), *Las Tasas de Residuos en España 2020*, Fundació ENT, Vilanova i la Geltrú, pág. 29.

28 Si bien el apartado F del Anexo I de la Ordenanza vigente en 2022 sí prevé una tarifa adicional para la «recogida de caja cerrada sin compactación».

29 El art. 25.2 in fine de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos dispone que «entre los modelos de recogida de las frac-

el establecimiento de mecanismos de pago por generación. Sin embargo, como hemos visto, en la actualidad la cantidad a pagar no guarda relación alguna con los residuos generados.

Por otra parte, es dudoso -y difícilmente practicable en la mayoría de los municipios de territorio común- que la ley exija implantar tasas por generación en sentido estricto aplicables a todos los residuos domésticos una vez concluya el mencionado periodo de tres años³⁰. La ley solo exige que el nuevo sistema «permita implantar sistemas de pago por generación», no que tales «sistemas» se implanten efectivamente en todas las modalidades de tasas y tarifas de residuos municipales.

Por su parte, el art. 11.4 de la Ley de Residuos (introducida durante el trámite parlamentario) contempla otras posibles configuraciones de las futuras tasas o tarifas:

Art. 11.4. Las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán tener en cuenta, entre otras, las particularidades siguientes:

a) La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar.

b) La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida sepa-

rada de materia orgánica compostable.

c) La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local.

d) La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

5. Las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección, a las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

Debe subrayarse que el único mandato imperativo de esta norma (que, por otra parte, no se acompaña de sanción en caso de incumplimiento) es la comunicación de las «tasas» (es de suponer que el precepto se refiere también implícitamente a las tarifas) «así como los cálculos» en que se basan a «las autoridades competentes de las comunidades autónomas» (apartado 5º).

En cuanto al apartado 4º, parece una habilitación a las entidades locales para modular el gravamen atendiendo a diversos criterios, aunque su relevancia jurídica es limitada. En efecto, la norma se asemeja más un precepto didáctico que una efectiva

ciones anteriores que establezcan las entidades locales se deberán priorizar los modelos de recogida más eficientes, como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes que garanticen ratios de recogida similares».

30 Cfr. Herrera Molina, P.M. (2021), «Incidencia de la futura ley de residuos sobre las tasas y tarifas locales», *Tributos Locales* 152, págs. 13 y ss.

habilitación³¹.

Por una parte, la ley no precisa los «márgenes» de la «diferenciación». Es decir, no señala máximos y mínimos. Si estuviéramos ante beneficios fiscales, podría pensarse que se está erosionando el principio de reserva de ley pese a la mayor flexibilidad de este principio en el ámbito local.

Sin embargo, no estamos ante auténticos *beneficios fiscales*. Se trata más bien de consideraciones genéricas sobre el diseño del gravamen que -a nuestro entender- las entidades locales podrían aplicar, aunque no existiera el correspondiente precepto.

Así, en cuanto a la «*diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social*» es una mera consecuencia del principio de capacidad económica (que actúa como límite externo a la cuantía de las tasas). Como señala el art. 24.4 TRLHL «Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas». El precepto puede aplicarse por analogía a las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (tarifas), puesto que el «riesgo de exclusión social» es idéntico -existe identidad de razón- cuando el servicio no dé lugar a la exigencia de tasas sino de tarifas.

Por lo que se refiere a las «diferenciacio-

nes o reducciones» en los casos de «*prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable*», así como de «*participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local*», responde al propio concepto de «tasas por generación» tal y como se definen en el art. V de la Ley, por tanto, no necesita una habilitación específica, aunque esta pueda tener cierta utilidad desde una perspectiva didáctica.

Por último, nos encontramos con «*La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar*». En la medida en que resulta más difícil garantizar la recogida separada en los supuestos de alquiler de temporada, este precepto no establece una excepción al sistema, sino que aplica la lógica de las tasas por generación a un supuesto concreto. Por otra parte, el precepto resulta tan genérico (no especifica en qué pueden consistir estos sistemas) que su utilidad resulta limitada.

Pues bien, como hemos visto, la citada Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios de gestión de los residuos urbanos ya contempla una cuota reducida del 10 por 100 (es decir una reducción del 90 por 100) para

31 Esto no sucedía en la versión original de la enmienda que ha dado lugar a este precepto, pues en ella los diversos criterios venían precedidos del siguiente párrafo «3. Las tasas y las tarifas de los servicios prestados por los entes locales tendrán que ser fijadas por las ordenanzas correspondientes, las cuales deben tener en cuenta, además, las particularidades siguientes» (enmienda núm. 421 del Grupo Parlamentario Plural).

«personas usuarias de del servicio en situación de vulnerabilidad económica»³². Se prevé, además, una cuota reducida del 50 por 100 para «municipios y concejos en riesgo de despoblación»³³.

La ordenanza no prevé reducción alguna por actividades de compostaje doméstico³⁴. Sí contempla una tarifa «sin cuota» por entrega de «residuos de construcción en obras menores» en el punto limpio del CTRU, siempre que no se superen determinadas cantidades (por ejemplo, dos unidades de ventanas por entrega y día).

V. CONCLUSIÓN

Para que las tarifas por recogida y tratamiento de residuos en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se adapten al mandato del art. 11 de la Ley estatal de Residuos bastaría -aunque no se trata de un cambio

menor- que se incrementara el importe de modo que cubriera todos los costes (en sentido amplio) relacionados con la recogida y tratamiento de residuos.

En la actualidad la tarifa ya se basa en *sistemas de generación* para los grandes productores de residuos (si bien no distingue según las características del residuo generado). En cuanto a los residuos domésticos, ya se utilizan contenedores de acceso mediante tarjeta magnética para las fracciones orgánicas y resto, lo que podría constituir un punto de partida para cuantificar la tarifa en función de los residuos generados³⁵. No obstante, es dudoso que esto constituya una verdadera exigencia de la Ley de Residuos. Por otra parte, la vigente ordenanza ya establece una cuota reducida para personas en situación de vulnerabilidad económica y una cuota cero para determinadas entregas realizadas en el punto limpio.

Desde el punto de vista del reparto de

32 Cfr. el apartado B del Anexo I de la ordenanza vigente en 2022.

33 Apartado F del Anexo I de la ordenanza vigente en 2022. El Anexo III considera «municipios y concejos en riesgo de despoblación extremo e intenso aquellos cuya densidad de población sea inferior a 25 hab./km2.

34 A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de San Sebastián-Donostia. Los apartados 1.6 y 1.7 del art. 11 de su ordenanza establecen una corrección de la cuota de la tasa por compostaje individual y comunitario. En el Anexo a la ordenanza que rige desde el 1 de enero de 2022 se establecen unos porcentajes de corrección de la cuota fija de la tasa del 30 y del 50 por 100 por la participación en actividades de compostaje comunitario e individual, respectivamente. Para disfrutar de esta reducción es necesario que quienes ocupen las viviendas se den de alta en el Registro Municipal de Compostaje.

35 El art. 16 de la ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la MCP establece que: «Con el fin de alcanzar los objetivos recogidos en el artículo 15 de la presente Ordenanza, se instalarán, de forma progresiva, sistemas de apertura de contenedores y buzones, mediante tarjeta y/o dispositivo equivalente, en las fracciones de materia orgánica y resto, que permitirán la captación y registro de los datos de apertura de cada contenedor y/o buzón con objeto de conocer su grado de utilización para lograr los objetivos normativos, así como para la realización de actividades de promoción del servicio y sus resultados». Sin embargo, entre los objetivos normativos que se recogen en el art. 15 y que se pretenden alcanzar mediante los contenedores de apertura electrónica implantados por la MCP para las fracciones orgánica y resto no se menciona el pago por generación, lo que no significa, como es obvio, que no se pueda incluir en un futuro próximo.

competencias, parece necesario que se dicte una ley foral que regule las futuras tasas o tarifas de las entidades locales de Navarra en el marco (ambiental) de la ley de residuos.

BIBLIOGRAFÍA

- ANEIROS PEREIRA, J. (2018), “La incorporación al Derecho positivo tributario del concepto de prestación patrimonial de carácter público por, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y sus pretendidas consecuencias”. *Quincena Fiscal*, núm. 7, págs. 35-75.
- DEL AMO GALÁN, O. (2018), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público. Aspectos prácticos”, en *La Ley*, núm. 15611.
- FLUIXÁ MARTÍNEZ, A. (2021), “El gran debate de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”, en <https://derecholocal.es/opinion/el-gran-debate-de-las-prestaciones-patrimoniales-de-caracter-publico-no-tributario> (consultado el 27-5-2022).
- HERRERA MOLINA, P.M. (2021), “Incidencia de la futura ley de residuos sobre las tasas y tarifas locales”, *Tributos Locales*, núm. 152, págs. 13-41.
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2019), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en el ámbito local: origen y regulación actual”, *Anuario de Derecho Municipal* 13, págs. 57-83.
- PAGÈS I GALTÉS, J. (2022), “La prestación económica por la gestión local de residuos (Segunda parte): extrafiscalidad y parafiscalidad”, en *Tributos Locales*, núm. 157, págs. 33-123.
- PALAO TABOADA, C. (2023), “Prestaciones patrimoniales de carácter público”, en *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, 481 (abril 2023), pp. 5-58.
- RUIZ DE APODACA ESPINOSA, A. (2019), “Hacia la economía circular. Aspectos destacados de la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad”, *Actualidad Jurídica Ambiental*, núm. 87, págs. 100-114. https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_18_Ruiz_Apodaca_Economia_circular_residuos-fiscalidad.pdf.
- SANZ GÓMEZ, R. (2021), “Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias a la luz de las transformaciones del modelo de Estado: una propuesta de clarificación”, en *Civitas Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 191, págs. 183-232.
- TANDAZO RODRÍGUEZ, A. Y HERRERA MOLINA, P.M. (2019), “Una nueva parafiscalidad: Constitucionalidad de las “tarifas” como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias”, *Tributos Locales* 142, págs. 29-43.
- TERRÉN PASTOR, A. *et al.* (2021), *Las Tasas de Residuos en España 2020*, Fundació ENT, Vilanova i la Geltrú.